

## Discurso Inaugural 4to Congreso ACCIÓN - 2016

Un congreso es ciertamente una oportunidad de revisar lo que nos hemos propuesto y realizado como organización en el pasado y una instancia privilegiada para hacer un balance de lo que hemos logrado. También es un momento de mirarnos para ver en que hemos cambiado y que hemos conservado de nuestro acervo histórico al enfrentar las dinámicas de la vida social y política de la sociedad de la que somos parte, que importan nuevos desafíos y tareas.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son el espacio natural de participación de la ciudadanía interesada en el devenir de la sociedad de la que son parte, y adquirieron un protagonismo creciente durante el período en que dictaduras militares y gobiernos autoritarios asolaron América Latina. Este protagonismo estuvo concentrado en forma especial en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la recuperación de la democracia, y constituye aún una fuente de legitimidad primigenia del segmento de OSC conocidas como ONG's de desarrollo, defensoras de los derechos humanos y bienes públicos.

Sin embargo las políticas de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos vinieron acompañadas por políticas de desmantelamiento de los estados de bienestar construidos durante décadas por las luchas de los pueblos para mejorar su calidad de vida y participación política, que

empujaron a las OSC a asumir tareas en el campo del desarrollo social y en la búsqueda de respuestas innovadoras a las problemáticas y desafíos que enfrentaron las sociedades para mantener su cohesión social.

De esta manera se puede señalar que la función tradicional de las OSC ha sido, y es, la organización y empoderamiento de la ciudadanía para la participación en la gestión pública y la defensa y promoción de los derechos humanos. Los procesos de transición iniciados con posterioridad al abandono de los militares del poder gubernamental dieron inicio a etapas marcadas por ajustes estructurales, mandatados por los organismos financieros internacionales. Esto profundizó aún más el abandono de los Estados de la provisión de bienes y servicios públicos, privatizándolos, convirtiéndolos en bienes de mercado y externalizándolos, instalando así una lógica clientelista en la relación con las OSC.

Esta desnaturalización de los objetivos fundacionales de las OSC ha instalado en ellas la necesidad de reflexionar profundamente en el rol que quieren cumplir en sociedades fragmentadas en su cohesión social, con Estados crecientemente despojados de sus capacidades de dar respuestas a las necesidades de sus ciudadanos al extremo de que el mismo concepto de ciudadanía está sujeto a cuestionamiento. Asumir las complejidades de este nuevo escenario otorga la oportunidad a las OSC de convertirse en actores centrales para nuestra sociedad como formadores de opinión, constructores de modelos de país, y muchas veces agentes de control de las acciones del Estado y con incidencia en la política pública. Es así como las OSC están llamadas hoy a tener un rol fundamental en la consolidación del sistema democrático, la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana en la construcción de lo público.

En el caso chileno, el acelerado deterioro de la situación social y política ha ido generando un severo cuestionamiento a la legitimidad y representatividad de los actores políticos del sistema. Este deterioro puede ser identificado como el fin del ciclo político de una transición extremadamente prolongada, que devino en un modelo de estado equilibrado entre una mayoría democrática insuficiente y un pinochetismo enquistado en enclaves de poder y amarres institucionales. Esto permitió a una única coalición política gobernar durante 20 años con la legitimidad de autoarrogarse la representación exclusiva de haber derrotado políticamente a la dictadura cívico-militar, congelando el proceso de transición y consensuando un mínimo de reformas con las fuerzas políticas que le habían dado apoyo civil al régimen producto del golpe de estado.

Este ciclo tuvo como producto la legitimación del modelo socio-económico impuesto a sangre y fuego, la desmovilización y desmantelamiento del tejido social que generó las condiciones para imposibilitar la continuidad del régimen dictatorial, y el achatamiento de las expectativas de futuro en la medida de lo posible como una lógica estructural de las propuestas políticas permitidas por el poder. El fin de este ciclo debe tener como horizonte una nueva constitución elaborada por una Asamblea Constituyente, cualquier camino que se desvíe de esa meta funcionará como válvula de presión de la ilegitimidad que atraviesa la crisis política actual.

En otra faceta de esta realidad, a la crisis política se suma una profunda crítica a los actores privados del mercado por sus prácticas de colusión y abuso de la precariedad del mercado del trabajo. Concebidos como un motor del desarrollo económico y como modelos y ejemplos de ascenso social, los emprendedores instalados en la cúspide de la pirámide económica y social han mostrado tal nivel de falta de ética y desapego a los mínimos valores de honestidad y rectitud que solo la complicidad de los grandes medios de

comunicación los ha mantenido relativamente inmunes a la sanción social, sea como ella se exprese. En perspectiva, del predominio neoliberal en los 90 con la imposición de un pensamiento único y el confinamiento consecuente de la sociedad civil producto de los impactos del ajuste económico y del abandono de las funciones básicas del Estado, se ha pasado a la emergencia de variadas propuestas de cambio político y a un nuevo protagonismo de los actores y movimientos sociales que demandan soluciones a sus problemas.

La movilización social masiva se ha intensificado estos últimos años, con la aparición de actores nuevos, con múltiples y diversos objetivos, pero animados de un espíritu de transformación profundo. Esta tendencia de la sociedad a expresarse con más fuerza y diversidad no sólo es producto de crisis económicas y las extremas desigualdades, sino que también son resultado de nuevos desafíos que vienen desde la ciudadanía: participación, descentralización efectiva, ampliación de las formas y mecanismos democráticos, no-discriminación, interculturalidad, derechos y autonomía de los pueblos indígenas, cuestionamiento a los modelos de economía basados en la extracción de materias primas, por mencionar solo algunos.

Ni las crisis de legitimidad y de representación, podrían ser resueltas desde fuera de la sociedad civil y sin su total involucramiento. El fracaso de las políticas tendientes a aminorar la pesada tendencia a la desintegración social conformada a partir de las reformas estructurales de matriz neoliberal se ha hecho evidente. Esto se puede entender también como un fin de ciclo. El fin de ciclo de las reformas democráticas restringidas que tenían como objetivo la construcción de un ciudadano y una ciudadana concebidos como sujeto social autoregulado, por un lado como cliente – engranaje de la oferta y la demanda- y por otro como emprendedor autoexplotado sujeto a los vaivenes de la crueldad del mercado, siempre individualista a ultranza y en

competencia por el ascenso social, ha introducido crecientes niveles de incertidumbre en las proyecciones de desarrollo de los más diversos actores de la sociedad, esto es, los económicos, los políticos, los culturales, etc.

Por otro lado, pero en la misma línea, toda la oferta de bienes y servicios públicos puesta al servicio de este modelo de privatización de la vida en pos del ascenso en la pirámide de acumulación empieza a ser fuertemente cuestionada. El fin de ciclo se confunde con el fracaso del cliente y del emprendedor que son objeto de abusos sostenidos y sistemáticos. Ello ha abierto una ventana de oportunidad para la re-politización del espacio público y la redefinición del papel que la sociedad actual y sus organizaciones pueden jugar en este nuevo escenario. Pero ello implica desarrollar canales de participación para que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes definan las prioridades de su propio desarrollo, junto a reconstruir sistemas de representación consistentes con ello.

La pregunta que surge es si están dadas las condiciones para que este escenario se traduzca efectivamente en una ampliación y profundización de la democracia y con nuevos y mejores canales de participación y representación política que se constituyan en efectivas fuentes de legitimidad de una nueva institucionalidad política. El desafío que vive Chile en la actualidad es el de construir una forma de articulación entre el Estado y la sociedad que no esté mediada por otra lógica ni por otras definiciones que aquellas que los propios ciudadanos y ciudadanas decidan y sean capaces de llevar adelante.

## **DESAFÍOS PENDIENTES**

La democracia está en primer término en manos de la ciudadanía. Tanto la sociedad civil organizada como los gobiernos comparten la responsabilidad de construir conjuntamente las condiciones para lograr una verdadera gobernabilidad democrática basada en el respeto a los

Derechos Humanos. A saber, la gobernabilidad democrática implica el fortalecimiento del Sistema de promoción y protección de los derechos humanos como garante de los mismos a través del cumplimiento de los tratados internacionales que ha suscrito Chile, la adecuación de las legislaciones internas para la garantía de los derechos humanos y de que el sistema cuente con un presupuesto adecuado para su funcionamiento.

Pero la democracia en sí misma, como mero ejercicio electoral, no es la panacea para la solución de todos los problemas como bien lo han mostrado los gobiernos progresistas que dieron esperanza a América Latina durante los últimos 10 años. La democracia representativa es necesaria pero no suficiente para darle sustentabilidad a procesos que incorporen a la ciudadanía en su conjunto a la vida económica, política, social y cultural de un país. En esta dimensión también es posible identificar un fin de ciclo. Aquel que ha ido de la mano de las privatizaciones espurias que transfirieron a precio vil las empresas públicas, para servir de base a la acumulación originaria de un extractivismo brutal que amenaza con dejar enormes territorios despojados de sus riquezas transferidas aceleradamente hacia los países de origen de los capitales, que nominalmente aparecen como cifras de crecimiento económico pero que solo miden valores que transitan por los bancos de la plaza. Este ciclo también termina fracasando en su promesa reiterada y explícita de alcanzar los niveles de desarrollo del llamado primer mundo como si el desarrollo fuera una mera acumulación de incrementos del Producto Interno Bruto.

Profundas y estructurales inequidades están a la base de los modelos realmente existentes generando poderosas resistencias a los cambios necesarios. En este sentido se pueden identificar como obstáculos el conjunto de tratados de libre comercio firmados a lo largo de estos años incluyendo recién suscrito, y en espera de ratificación, TPP, que en la práctica han significado una pérdida de soberanía necesaria

para impulsar políticas que permitan salir del extractivismo y la dependencia de los flujos financieros que fragilizan las economías nacionales.

También se hace necesario asumir que los proyectos nacionales ya no parecen capaces de aislarse del contexto internacional. Los mercados cada vez más internacionalizados implican desafíos de políticas públicas de dimensiones difíciles de imaginar en los espacios en que se desarrolla la vida comunitaria, que nutre una organización de la sociedad civil especialmente en sociedades tan fragmentadas como las que ya avanzado el siglo XXI se empeñan en encontrar respuestas a los desafíos del desarrollo. La realidad del cambio climático, la crisis ambiental global, la desertificación y las crisis humanitarias son elementos imposibles de soslayar al momento de hablar de desarrollo y democracia participativa. La inserción en el mundo global es un desafío para el cual no se tiene respuesta pero urge hacerlo parte de cualquier debate que mire el futuro.

Una de las principales debilidades de este proceso se encuentra en la fragmentación y dispersión de las demandas sociales y la ausencia de un proyecto común que unifique las luchas por un modelo alternativo de sociedad, impulsar un proceso que instale una democracia y una economía de inclusión social, de justicia social, de reconocimiento de la soberanía popular.

Es en este escenario, de superposición de agotamiento de ciclos políticos, económicos y sociales, unida a los efectos del aterrizaje de la emergente crisis económica mundial que se avizora en el horizonte internacional, donde ACCION requiere tener una respuesta a las necesidades de la sociedad civil y sus organizaciones, a saber, el reconocimiento de la actoría política de la OSC por parte del Estado; el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil mediante la construcción de mecanismos efectivos y democráticos y la generación de un ambiente habilitante para el quehacer de las

OSC's. Grandes tareas que requieren claridad en los conceptos, voluntad política para impulsarlas y tenacidad para salvar los obstáculos que el camino presentará, como siempre.

En este contexto social, político y económico de grandes objetivos, ACCION debe actualizar sus definiciones, elaborar nuevas prioridades y nuevas formas de trabajo, como colectivo de OSC comprometidas con los cambios sociales y con la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión y desarrollo del país. Los animamos a asumir activamente este desafío que aglutina coherentemente el conjunto de desafíos y objetivos que ACCION se requiere plantear.

Francis Valverde Mosquera  
Presidenta ACCIÓN